

En Santiago, 6 de mayo de 2025.

Se ha reunido esta Sala del Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 339 y 340 del Código Procesal Penal, y tras el debate de rigor, ha llegado a las siguientes conclusiones:

PRIMERO: Que, con el mérito de la prueba rendida, la que se valora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, toda la cual será debidamente analizada y ponderada en la sentencia, se estiman acreditados, más allá de toda duda razonable, en lo medular los hechos materia de la acusación; con excepción de los signados bajo los N°s 5 y 6 en el auto de apertura.

Tal aserto se funda en el mérito de la prueba rendida en juicio, de naturaleza testimonial, pericial, fílmica, interceptaciones telefónicas incorporadas como audios, posicionamientos o georeferenciaciones por antenas de celular y prueba material, entre otras.

Este tribunal, en primer término, ha podido tener por establecida la **existencia de una agrupación** en los términos expuestos en la acusación, en las que le cupo participación en lo pertinente, y en las ocasiones que se señalarán, a los nueve acusados de esta causa, en ejercicio de diversos roles, todos previamente determinados y afines u orientados a la realización de delitos de robos con intimidación y violencia, en la modalidad salida de banco.

Se pudo establecer una dinámica y forma de organizarse, necesariamente colectiva, que se reiteró en los ilícitos contenidos en los cuatro primeros hechos de la acusación y que es acorde a la planteada por los acusadores, existiendo principalmente dos sacadoras o marcadoras que participaron en los 4 ilícitos referidos, que elegían a las víctimas en distintas sucursales bancarias, comunicándose al resto del grupo; la utilización en todos ellos de dos vehículos – con sus respectivos conductores - que, además de trasladar a las marcadoras y al resto del grupo, participaban luego en el seguimiento de las víctimas y su posterior acometimiento, con el uso de armas de fuego, hasta lograr la sustracción de los dineros que las víctimas habían retirado en sus respectivas diligencias bancarias.

El establecimiento de dicho grupo y del referido modus operandi, se funda en el análisis concatenado de los medios de prueba que se fueron incorporando en audiencia por testimonios, ya sea de víctimas, testigos civiles, peritos y particularmente por oficiales policiales que tomaron parte en las distintas diligencias investigativas, relevándose que en ella trabajaron diversas Unidades Policiales como la BICRIM Independencia, Brigadas de Robo Sur y Occidente, el grupo especial REPOME, las que si bien fueron expuestas sistematizadamente en audiencia por el inspector Felipe Abarza, fueron refrendadas y explicadas por los propios agentes de estas unidades, además de funcionarios de Carabineros, quienes concurrieron a dar cuenta de las diligencias por ellos efectuadas.

Resulta relevante para este tribunal, que si bien **la propia forma de operar de este grupo** - casi idéntica en los cuatro hechos conocidos en este juicio -, y los roles específicos que a cada uno de sus miembros debió desempeñar, ya **denota un alto grado de concierto y planificación**; también existen interceptaciones telefónicas y declaraciones que dan cuenta de esta planificación previa, principalmente en la comuna de Lo Espejo, sector en que también se acreditó, era en el que se reunían luego de cometer los ilícitos. La relevancia de tener por establecido este concierto y planificación previa dice relación con la atribución de responsabilidad que se realizará respecto de cada uno de los imputados, ya sea en los delitos de robo con violencia e intimidación, como en el ilícito de robo con homicidio, como se dirá.

Cabe señalar, por otra parte, que la existencia de estos cuatro ilícitos; y en su caso, los resultados de muerte y lesiones de algunas de las víctimas, si bien no fueron materia de discusión, quedaron suficientemente anclados por la actividad probatoria del persecutor.

SEGUNDO: En lo concerniente al ilícito atribuido a Huerta Salinas, esto es, homicidio frustrado de carabinero en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones, estos adjudicadores, en forma unánime, arribaron a la convicción que concurren a

su respecto los elementos del tipo, tanto objetivos como subjetivos, por el cual se le atribuye responsabilidad en la acusación, descartando con ello su recalificación a un delito de lesiones, pretendido por su defensa; y pudo establecerse suficientemente que aquel fue cometido con dolo directo y no eventual.

Para arribar a estos asertos se tomó en consideración prueba testimonial, documental, fílmica, pericial y material, la que permitió dar cuenta, primero, de la condición de funcionario de Carabineros del cabo Friz, y el hallarse ejerciendo sus funciones al momento de la perpetración del ilícito, quien incluso depuso en estrados detentando aun tal calidad; también de la ejecución de al menos un disparo en su contra por parte de Huerta Salinas utilizando un arma de fogeo adaptada para disparar; y además, se justificó suficientemente la

concurrencia en el encartado del elemento cognoscitivo del tipo, permitiendo dejar por establecido que aquel disparó sabiendo que lo hacía en contra de un funcionario policial, lo que fue posible asentar con las declaraciones del sargento Quijada, el propio cabo Friz, tangencialmente por el cabo Toledo, pero además por el padre de la víctima, de iniciales J.Z.R., todos contestes en que antes de existir un intercambio de disparos el cabo Friz se identificó a viva voz.

Ahora, el tribunal tuvo en especial consideración que aun cuando el disparo percutido por Alejandro Huerta terminó causándole solo lesiones leves al cabo Friz, parte del proyectil quedó alojado en el rostro de este último, y la herida provocada se la causó en parte de sus labios, como se consignó en el informe de Atención de Urgencia N° 80296 de fecha 15 de diciembre de 2020, confeccionado por el Hospital de Carabineros y en el Informe Médico de Lesiones asociado a dicho D.A.U., confeccionado por la misma institución.

Habiéndose acreditado que el encartado, conocía el carácter de funcionario de Carabineros de la víctima, considerando la distancia en la que se hallaba el disparador respecto de aquel; el tipo de arma de fuego que utilizó – ametralladora a fogeo adaptada para calibre .380, circunstancia asentada en el proceso pericialmente –, y como se dijo, particularmente el sector del cuerpo al que apuntó y la ubicación de esta lesión – la parte superior del cuerpo –, evidencian que su voluntad fue efectivamente la contenida en el tipo penal por el que se le acusa, esto es, tuvo por fin causar la muerte de un funcionario policial en servicio; y tal resultado no se provocó, pese a que Huerta Salinas puso de su parte todo lo necesario para que aquello ocurriese, no verificándose por causas independientes de su voluntad, cabiéndole entonces responsabilidad como autor en este delito, en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal, en el carácter de frustrado.

Por los asertos anteriores se descarta la solicitud de recalificación impetrada por la Defensa Penal Pública; y habiéndose tenido por establecido que Huerta Salinas actuó con dolo directo, se omitirá pronunciamiento respecto de su alegación de descartar su responsabilidad, por tratarse de un delito en una fase imperfecta de su realización con dolo eventual.

TERCERO: En lo atinente al fallecimiento de doña Ruth Bocanegra Mendiola en el hecho ocurrido el 8 de marzo de 2021, la causa de su deceso por traumatismo torácico por proyectil balístico único, fue debidamente acreditada con la respectiva prueba pericial tanatológica, los funcionarios policiales que conocieron de la opinión profesional del médico policial en el Hospital El Carmen y el respectivo certificado de defunción.

Ahora, si bien en la acusación no se determina cuál de los sujetos actuantes habría percutido el disparo que ocasionó la muerte de la víctima, quedó suficientemente acreditado que el disparador fue Marco Morales Astete – quien además lo reconoció en estrados –, ello principalmente por el material fílmico incorporado a la audiencia, en el que fue posible apreciarlo al momento de posicionarse en el lado del copiloto del vehículo del marido de la víctima, además de los testimonios de los funcionarios policiales que confeccionaron los respectivos fotogramas, el acceso que se acreditó que mantenía este encartado a armas de fuego y su posicionamiento en el sitio del suceso en uno de los vehículos utilizado para el acometimiento. La trayectoria del proyectil, de arriba abajo, de adelante hacia atrás y de

derecha a izquierda quedó debidamente asentada por la misma prueba pericial tanatológica, y resulta coincidente con el posicionamiento de Marco Morales, lo que permite descartar por su parte, que el disparo fatal haya sido percutido por el segundo de los sujetos que también disparó hacia el interior del vehículo, pero desde la puerta del piloto.

La circunstancia que el disparo se haya hecho a tan corta distancia, prácticamente a quemarropa, solo separado el disparador de la víctima por una ventana de automóvil, con un medio apto para causar la muerte, un

arma apta para el disparo – asentado por el propio resultado fatal – evidencia en la especie el dolo homicida. Marco Morales percutió un arma de fuego directamente en contra de la víctima, en su zona pectoral o axilar, que necesariamente iba a afectar diversos órganos y vasos sanguíneos necesarios para mantenerse con vida, como ocurrió en la especie, sabiendo necesariamente la ubicación de la occisa, lo que se deriva de la propia dinámica del acometimiento, al proceder luego otro de los sujetos – Carlos Silva Olivares – a sustraer el bolso contenedor del dinero cuya apropiación pretendían. Para estos magistrados, la prueba incorporada al proceso, es suficiente para atribuirle a este encartado dolo directo en el homicidio de Ruth Bocanegra Mendiola.

Luego de establecido que concurren la especie los elementos objetivos y subjetivos del tipo homicida, aparece de manifiesto conforme el devenir causal de los acontecimientos, que dicho homicidio ocurrió con ocasión de este delito de robo con violencia, teniendo por fin el permitir la expropiación del dinero de las víctimas, configurándose en la especie la figura calificada de robo con homicidio contemplada en el artículo 433 N° 1 de nuestro Código Penal, correspondiéndole en aquel la calidad de autor ejecutor contemplada en el numeral primero del artículo 15 del mismo cuerpo legal.

Cabe señalar ahora, reiterando que no existió mayor discusión respecto a la existencia de estos cuatro primeros ilícitos y la dinámica en que se perpetraron, que para tenerlos por acreditados el tribunal contó con los elementos probatorios antes referidos, pudiendo a grandes rasgos señalarse que el testimonio de al menos tres testigos, funcionarios policiales miembros de la PDI, dieron cuenta en forma detallada y dando suficiente razón de sus dichos, de las diligencias investigativas desarrolladas para la totalidad de los ilícitos, sistematizándolas en su conjunto; pero concurrieron además, los funcionarios de Carabineros y de Investigaciones, a refrendar cada una de ellas, en las cuales les cupo participación.

De la misma forma, la participación que le cupo a cada uno de los encartados, por los hechos en que se les acusó, se logró establecer con los mismos medios probatorios, resultando relevante para ello particularmente, además de la prueba audiovisual, cuando se contó con material fílmico del marcaje, seguimiento y posterior acometimiento; el contenido de mensajería extraída del teléfono de Víctor Morales Astete, la vinculación de varios de los encartados a determinados aparatos celulares, con los que fue posible obtener su posicionamiento por antenas, interceptaciones telefónicas, ya sea de los propios participantes, como de su red familiar o de resguardo, reconocimientos en kárdex, los que también fue refrendada con el contenido de declaraciones efectuadas en el marco de la investigación por diversos involucrados en los ilícitos, ya sea acusados en estos autos, o con su situación procesal ya zanjada; debiendo relevarse que en el caso del Hecho N° 1, los encartados Víctor Morales Astete y Alejandro Huerta Salinas fueron detenidos en flagrancia.

La circunstancia que no exista un material fílmico claro, en la fase del ejercicio efectivo de la intimidación y violencia en la totalidad de los hechos que se les atribuyen, no obsta a que la participación de los encartados haya podido ser suficientemente acreditada, en el estándar que posibilita una decisión condenatoria, por medios de prueba, en determinados casos, indiciarios. A diferencia de la prueba directa – que en la especie existe, como la fílmica, pericial, prueba material, e incluso testimonial de civiles y funcionarios policiales que pudieron acceder a dichos sucesos – aquella resulta de la acreditación directa de múltiples indicios que el persecutor invocó, para inferir, de manera lógica y coherente la participación

que se pretendía acreditar, lo que ocurrió en la especie, tal como se desarrollará en la sentencia.

CUARTO: En concerniente a los ilícitos contenidos en los hechos signados bajos los N°s 5 y 6 de la acusación, estos jueces, por los argumentos que se señalarán más adelante, estuvo por absolver al encartado Jonathan Díaz Gaete, al no existir prueba suficiente para lograr atribuirle en forma exclusiva y excluyente los

hallazgos practicados en las diligencias de registro, allanamiento e incautación, ya sea del vehículo en el aparcadero municipal, como en su domicilio.

Cuestión distinta a la anterior, ocurrió con el hecho N°7, en que se logró atribuir la posesión o tenencia del arma de fuego en cuestión, marca FAMA E, a Marco Morales, en virtud, no solo del hallazgo en la vivienda que utilizaba de domicilio en Santiago, sino por medio de interceptaciones telefónicas y declaraciones en sede investigativa, como se dirá determinadamente en la sentencia.

QUINTO: Así, para el establecimiento de los hechos y participación de los encartados, en forma similar a la contenida en la acusación se contó, para el hecho N° 1 (del 15 de diciembre de 2020, acaecido en la comuna Maipú), con los siguientes medios probatorios:

Declaración de los funcionarios de Carabineros FRIZ MARTÍNEZ, QUIJADA YÁÑEZ, TOLEDO LEPE, PAREJA FLORES, además de los peritos institucionales HERRERA PINTO y ROMÁN RUBIERA, el testigo civil de iniciales F.A.S.P. y de los deponentes funcionarios policiales TORRES FERNÁNDEZ, TRONCOSO BRIONES, ROBLES OÑATE, OCAMPO MONTOYA, el perito SALINAS SALGADO y el carabinero UMAÑA HUENTELÉN. Como ya se adelantó, mediante estos testimonios, además de la declaración de los funcionarios policiales ABARZA CIFUENTES, CÓRDOVA MARABOLÍ y RAMÍREZ GARAY, se incorporó diversa prueba fílmica, fotográfica, material, geolocalizaciones, interceptaciones telefónicas, comparativos de imágenes e, incluso, testimonios de oídas de declaraciones efectuadas por terceros asociados a los hechos e imputados. A lo que se añade las propias declaraciones en estrados de los acusados ALEJANDRO HUERTA, PAOLA SALINAS y MARCO MORALES:

Para el hecho N° 2 (12 de febrero de 2021, en Puente Alto):

La declaración de los funcionarios policiales ALVARADO BARRÍA, OPAZO GONZÁLEZ, CÁRCAMO TURRA, ARAVENA SOTO; y de los testigos civiles reservados de iniciales E.M.E.M., S.A.Q.V., G.C.E.M. y M.E.L.H., además de las declaraciones de los funcionarios policiales ABARZA CIFUENTES, CÓRDOVA MARABOLÍ y RAMÍREZ GARAY reiterando que por su intermedio, se incorporó prueba de diversa naturaleza, además de contarse respecto de este hecho, con las declaraciones de los encartados CARLOS SILVA, PAOLA SALINAS y MARCO MORALES.

Para el Hecho N° 3 (16 de febrero de 2021, en Maipú):

Declaración de los funcionarios policiales MEJÍAS CANDIA, FIGUEROA BRUNA, la perito institucional NEGRETTI CASTRO, y el funcionario PARRA SALAZAR, reiterándose lo expuesto respecto de los funcionarios ABARZA CIFUENTES, CÓRDOVA MARABOLÍ y RAMÍREZ GARAY, y la incorporación por su intermedio de los otros medios de prueba a que se ha hecho alusión, contándose además en este caso con las declaraciones de los imputados PAOLA SALINAS y MARCO MORALES

Para el hecho N° 4 (08 de marzo de 2021, Cerrillos):

Declaración de los funcionarios policiales FUENTES MÁRQUEZ, MONTECINO ALARCÓN, ORTIZ MARTÍNEZ, los testigos civiles reservados de iniciales J.F.D.V., y C.M.C.A., los peritos BUSTAMANTE VALDEBENITO, TAPIA ROJAS y SOTO VALDÉS, haciéndose expresa remisión a lo expuesto respecto de los funcionarios ABARZA CIFUENTES, CÓRDOVA MARABOLÍ y RAMÍREZ GARAY, y la incorporación por su intermedio de los otros medios de prueba ya aludidos,

contándose además en este caso con las declaraciones de los imputados PAOLA SALINAS y MARCO MORALES.

Paras el hecho N° 5 (17 de mayo de 2021):

Declaración del perito armero JIMENEZ SILVA y del funcionario FUENTES MÁRQUEZ, además de las declaraciones de los funcionarios policiales ABARZA CIFUENTES, CÓRDOVA MARABOLÍ y RAMÍREZ GARAY, y la incorporación por su intermedio de los otros medios de prueba ya referidos.

Para los hechos N° 6 y N° 7 (ambos de fecha 15 de septiembre de 2021):

Declaración de los funcionarios policiales BRAVO PÉREZ y OPAZO MONARES, además de la perito balística PLAZA MUÑOZ, reiterando que además de las declaraciones de los funcionarios policiales ABARZA CIFUENTES, CÓRDOVA MARABOLÍ y RAMÍREZ GARAY, y la incorporación por su intermedio de los otros medios de prueba, como se desarrollará debidamente en el fallo.

Es por los asertos ya desarrollados, que se desestiman las alegaciones de insuficiencia probatoria impetradas por las diferentes defensas particulares.

SEXTO: En términos de la **coautoría** que este tribunal, por unanimidad, estuvo por atribuir a todos los coimputados, en cada uno de los hechos por los cuales se les acusó, respecto de los ilícitos de robo con intimidación y violencia, y robo calificado por homicidio - *desestimando con ello las alegaciones que pretendían atribuirles participación en calidad de cómplices* -, se tuvo en consideración para ello que en nuestro sistema, en su artículo 15 N°s 1 y 3 del Código Penal permiten atribuir la realización completa de un tipo penal a quien no lo ha realizado por sí mismo, sino con otros, relevándose que **el tomar parte en la ejecución del delito**, a diferencia de lo expuesto por la defensa de Víctor y Jenniffer, ambos de apellidos Morales Astete, **no significa únicamente realizar una parte de la descripción del tipo penal**, en términos objetivo formales, sino que las disposiciones citadas asumen la intervención punible en un contexto fáctico que excede los elementos de la realidad subsumibles en el tipo penal. En este sentido la jurisprudencia ha estimado que **tomar parte en un hecho de manera inmediata y directa no implica solo realizar formalmente una parte del tipo, sino también intervenir en los hechos materiales que contribuyan directamente a su realización**, como ocurre en la especie en la actuación que se atribuye - y quedó anclada mediante la prueba en juicio -, tanto de las sacadoras o marcadoras, como de los integrantes del grupo operativo que cumplía el rol de ejercer la violencia e intimidación en pos de sustraer el dinero, considerando la función de seguimiento desplegada por ambos miembros, añadiéndose de tal forma a los conductores.

La razón para imputarles responsabilidad a título de autor no se limita a una consideración meramente formal respecto de la descripción típica, sino que material, que fluye de la existencia de un **hecho colectivo** que abarca las diferentes contribuciones de los distintos intervinientes; y lo relevante para dicha imputación se funda en el acuerdo o concierto para su realización, pues es en aquel que **se hace patente el conocimiento y la voluntad de realización de cada una de las partes del hecho individual que “a cada uno corresponde” y del hecho conjunto que solo de este modo se materializa**; así, *aunque no todos los coautores realicen formalmente el tipo penal, todos responden como si cada uno lo hubiese realizado completamente, imputándoseles entre aquellos, recíprocamente, sus contribuciones individuales*. De esta forma, la responsabilidad individual por el hecho colectivo implica que en razón del vínculo que crea el acuerdo de voluntades, cada uno de los intervinientes se puede considerar responsable del hecho colectivo como un todo.

Este concierto para la realización del hecho, en la especie, no se limita a la mera sustracción de dinero, o la puesta en peligro o afectación de un bien jurídico meramente patrimonial, como ya es factible concluir atendida la pluriofensividad de los propios ilícitos de robo con intimidación y violencia – que incorpora en su configuración

típica el riesgo de la integridad física de las víctimas -; sino que en el caso de marras, necesariamente **ha de atenderse a la reiteración en la comisión de dichos delitos**, en este caso 4, en todos los cuales se portaba armas de fuego, y su efectiva utilización en al menos dos ocasiones que precedieron el acometimiento del hecho ocurrido el 8 de marzo de 2021, en el que se provoca el fallecimiento de Ruth Bocanegra Mendiola.

La reiteración de estos ilícitos, luego que en el primero se produjo un disparo en el rostro a un funcionario policial, en el mes de diciembre de 2020; en otro se golpeará con parte de las referidas armas a personas de avanzada edad; y luego, el 16 de febrero de 2021, en que se lesionó a una de las víctimas mediante un disparo en su glúteo, **permite colegir, que en dicho concierto previo, planificación o acuerdo de voluntades, se asumía la efectiva utilización de armas de fuego, ya no solo con el objeto de amedrentamiento, sino con el de lesionar e incluso provocar la muerte de uno de los acometidos**, - previamente seleccionados por las sacadoras, seguido luego por los conductores y aquellas, y finalmente abordados por quienes fungían de brazo operativo -, obedeciendo con ello a la planificación por ellos concertada, y al desempeño del rol que a cada uno le correspondía para concretar con éxito la apropiación de los dineros -. Es así, que se descarta la alegación de la defensa de Víctor y Jenniffer, Morales Astete, consistente en que este acuerdo de voluntades, o concierto previo, se limitaba a la mera afectación patrimonial de las víctimas previamente seleccionadas, recogido en parte por el resto de las defensas.

SÉPTIMO: En cuanto a la alegación de vulneración de garantías consistente en la valoración que pueda darse a declaraciones efectuadas por los imputados, y terceros asociados a los hechos, en sede investigativa, levantada en primer término por la defensa de Díaz Gaete, pero erigida luego por la mayoría de las defensas particulares al momento de sus alegatos de clausura y réplicas, estos magistrados están por su rechazo.

La alegación se sustentó en el derecho a guardar silencio, que es una garantía que se desarrolla en el ordenamiento procesal penal, el cual tiene por objeto el derecho a no autoincriminarse, en lo que a sus declaraciones se refiere, y se reconoce al imputado en la Carta Fundamental, y a nivel legal, en el Código Procesal Penal.

Menester es delimitar el contenido de dicha garantía constitucional, la que conforme al artículo 19 N°7, letra f) establece que en las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a que declare bajo juramento sobre hecho propio, garantía que se desarrolla en el ordenamiento procesal penal en el derecho a guardar silencio, recogido en el artículo 93, letra g) del código del ramo.

Cabe señalar, en primer término, que este derecho, en general como todo derecho, es renunciable, pero tal renuncia para que sea jurídicamente eficaz debe ser voluntaria o libre e informada. El que sea voluntaria o libre se traduce en que la declaración del imputado no debe ser el resultado del empleo de cualquier forma de tortura o maltrato. A nivel legal, el artículo 93, letra h) del Código Procesal Penal señala como derecho del imputado el no ser sometido a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Lo cierto, es que más allá de las alegaciones esbozadas por las defensas, no se arguyó, ni menos acreditó, que hubiesen sido prestadas, tanto ante efectivos policiales como ante la propia Fiscalía, en dichos términos; limitando sus reclamos a que en ocasiones se habrían practicado sin un abogado defensor – cuestión que no la torna necesariamente en ilegal o inconstitucional, al reconocerse la posibilidad de la renuncia también en dicho aspecto -; o que en otros, tal revelación de aquellas en estrados, por testigos de oídas, no se condijo con la decisión de algunos encartados de no declarar ahora, en esta audiencia de juicio.

Por su parte, para la eficacia de la renuncia por parte del imputado de su derecho a guardar silencio, se requiere que ella debe ser informada, a este respecto el artículo 135 del Código Procesal Penal establece que el funcionario público a cargo del procedimiento de detención debe informar al afectado acerca del motivo de la detención, al momento de practicarla y, asimismo, debe informarle acerca de los derechos contemplados en los artículo 93, letras a),

b) y g); y 94, letras f) y g) del citado código, diligencia cuya omisión tampoco ha sido argüida ni acreditada en la especie.

La Segunda Sala Penal de la Excma. Corte Suprema se ha pronunciado en cuanto a estimar procedente que la declaración del imputado renunciando a su derecho a guardar silencio sea ratificada por un tercero en el juicio, señalando que toda persona que sea detenida o indicada de cualquier forma como partícipe de un delito, tiene derecho a designar a un abogado desde ese mismo momento, lo que debe ser realizado de manera efectiva, sin que se pueda practicar ningún acto procesal de la instrucción en que el imputado deba intervenir personalmente, pero luego se encargó de dilucidar que dicha afirmación tiene cabida, **“salvo que el propio imputado asienta a que esos actos se realicen sin la presencia del defensor”**, lo que, atendida la falta de alegaciones al respecto, habría ocurrido en el caso de marras.

Asumiendo entonces, que no se alegó circunstancias que mermaran la validez de las declaraciones efectuadas en sede investigativa, y reconociéndose que si bien un imputado puede asilarse en su derecho a guardar silencio cuando así lo decida en las diversas etapas del procedimiento, tal invocación no puede impedir que lo ya manifestado libre y voluntariamente pueda ser usado en su contra, puesto que el derecho a guardar silencio no opera con efecto retroactivo.

Es por los asertos anteriores que estos magistrados, por unanimidad, descartan que en la revelación a través de funcionarios policiales en estrados, del contenido de declaraciones de imputados y otros terceros en sede investigativa, haya existido vulneración de garantías, por lo que dichos antecedentes no se valorarán de manera negativa.

Solo a mayor abundamiento, cabe agregar que en sólo una ocasión en el juicio, se provocó una objeción a los interrogatorios del Fiscal, por parte de la defensa de Jonathan Gaete, y lo fue careciendo de legitimidad activa, toda vez que se hizo cuando se pretendía incorporar la declaración extrajudicial de Jeremy Carrasco Aránguiz, cuya defensa particular no hizo uso de tal derecho a objetar.

OCTAVO: En cuanto a la alegación de vulneración de garantías constitucionales, ahora basado en la omisión de la obligación de registro, invocada por la defensa de Jonathan Gaete, sin perjuicio de no entenderse per se o a priori, como constitutivo de una afectación constitucional, se omitirá pronunciamiento, toda vez que, como se dirá, los dichos del funcionario policial a cargo de la incautación del domicilio de dicho encartado carecieron de cualquier refrendación en el proceso, y de hecho, los ilícitos en cuestión, comprendidos en el hecho signado en la acusación bajo el N° 6, fueron desestimados, por las razones que más adelante se señalarán.

NOVENO: En lo atinente a las pruebas ofrecidas e incorporadas por las defensas de Carlos Silva y Jonathan Gaete, como se desarrollará en la sentencia, estos adjudicadores estimaron que carecen de la aptitud probatoria para mermar la convicción a la que se arribó respecto de la existencia del hecho acaecido el 8 de marzo de 2021, en Maipú, con el desenlace fatal ya anotado y los partícipes en el mismo. La prueba testimonial ofrecida por Silva Olivares carece de cualquier corroboración en el proceso, entregándose información, además, en diversos aspectos contradictoria y sin dar suficiente razón de sus dichos; por otra parte, la pericia incorporada por la misma defensa, no dio cuenta de una metodología idónea para las conclusiones a las que arribó el profesional a

cargo de la misma, y estas últimas no aparecieron refrendadas por elementos objetivos que permitieran ilustrar al tribunal respecto del punto examinado, no bastando para ello la supuesta experticia anunciada por el deponente. No acreditó siquiera las formas en que habría tomado las medidas sobre las que se pronunció, su data o la información médica que supuestamente avalaría la absoluta inmovilidad del brazo izquierdo del peritado.

En cuanto a la prueba incorporada por la defensa de Díaz Gaete, si bien, pudo acreditar que el resultado de la pericia bioquímica efectuada efectivamente arribó a las conclusiones por él

indicadas, tal resultado no resulta suficiente para descartar la participación de su representado en el hecho N°4, toda vez que la ausencia de material biológico de Jonathan Díaz en el cuerpo de la víctima, es perfectamente explicable, atendido al rol que le cupo en dicho hecho, el cual no requería un contacto físico directo con la occisa.

La presentación, por último, por parte de la Defensa Penal Pública de los resultados de las pericias de residuos nitrados o deflagración de pólvora, entre otros, careció de la aptitud probatoria necesaria para establecer que su representado, Huerta Salinas, no haya practicado disparos en contra del funcionario policial, atendido el cúmulo de prueba que permitió establecer la efectividad de tal circunstancia, que por lo demás, fue parte de la tesis colaborativa planteada por la defensa, y a su vez reconocido en estrados por el propio encartado.

DÉCIMO: En cuanto a la alegación de la defensa de Jenniffer Morales Astete, en cuanto a reconocer un supuesto estado de vulneración de su representada, que tornaría necesario evaluar su participación en los hechos inculcados de conformidad a una perspectiva de género, estos jueces estimaron, en primer término, que no se incorporó antecedente alguno que permitiese acreditar el referido estado de vulnerabilidad que se esgrime para cimentar dicha alegación, como lo sería su condición de madre soltera y jefa de hogar, o la presunta enfermedad oncológica de su hija – máxime si quedó asentado en el proceso que la totalidad de los hijos comunes se encuentran debidamente reconocidos por su conviviente -, pero en segundo lugar, de haberse acreditado, fluye de las interceptaciones telefónicas a las que se pudo acceder, que aquella no detentaba un rol eminentemente pasivo en los hechos en que se acreditó su participación, sino que mantenía actividades del todo asimilables al resto de los sujetos integrantes de la banda criminal, en particular de sus hermanos, no pudiendo vislumbrarse por este Tribunal, que su accionar estuviese conducido externamente o impuesto por otro integrante del grupo, ni menos aún que aquello obedeciese a una consideración respecto de su género femenino. Por lo demás, el fallar con perspectiva de género, conduce justamente a evitar estereotipar a las mujeres, o atribuirles determinadas características que históricamente se les han arrogado, por el mero hecho de ser mujer, lo que pareciese ser que es lo que pretende de la defensa de esta encartada. Es por ello, que el tribunal desestimaré la referida alegación.

UNDÉCIMO: En cuanto al delito de porte ilegal de municiones imputado a Alejandro Huerta y Marco Morales, estos sentenciadores estiman que las municiones que se encontraban en el respectivo cargador y tambor de las armas incautadas, de calibres compatibles con las mismas, no pueden en la especie constituir un delito diverso al de tenencia ilegal de arma de fuego, convencional y prohibida, en su caso, por los que sí se ha emitido condena, ya que se subsume en estas últimas figuras, por no constituir una conducta diversa, al no existir, conforme a la prueba rendida, municiones adicionales que aquellas que podían soportar tanto el cargador de la ametralladora Zoraki adaptada, como el tambor del revolver FAMAE.

DUODÉCIMO: Respecto de los delitos de porte ilegal de arma de fuego, de arma de fuego prohibida y de municiones imputados a Jonathan Díaz Gaete, a juicio del tribunal, la actividad probatoria desplegada por el persecutor no resulta suficiente, para atribuirle, más allá de toda duda razonable, el porte o tenencia de dichos elementos al encartado, toda vez que los hallazgos se produjeron en contextos en que su portación, posesión o tenencia, pudo corresponder a otros sujetos; en un caso, dentro de un vehículo del cual no es el dueño, usuario o

conductor, y que al momento en que se fiscalizó estaba siendo ocupado por al menos cuatro sujetos, uno de los cuales además comparte el nombre de Jonathan, tornándose ambigua o ambivalente, la interceptación telefónica incorporada por el persecutor en pos de vincularlo a dicha arma y munición. En cuanto los elementos encontrados dentro de su domicilio, al evidenciarse en el proceso que el hallazgo se realizó en una pieza diversa a la que pernoctaba, en un inmueble de tres habitaciones, en el que residían al menos otras tres personas, se requería el despliegue de una mayor actividad probatoria para establecer su vinculación con

el encartado, con un grado de certeza suficiente para atribuírselos, de manera exclusiva y excluyente, y cimentar una condena a su respecto.

DÉCIMO TERCERO: En cuanto al delito de receptación, la decisión absolutoria se cimenta en la misma falta de prueba suficiente para atribuir a Díaz Gaete la tenencia o posesión de las vestimentas presuntamente de Carabineros de Chile, al haberse hecho el hallazgo en la misma habitación ya referida; a lo que se añade que no se presentó antecedentes atinentes a la acreditación del delito base del cual habrían sido objeto, que es un elemento objetivo del tipo, ni se desarrolló actividad probatoria respecto del elemento subjetivo del mismo; cuestiones que resultaban relevantes, si se considera que el funcionario del Departamento de Asuntos Internos de Carabineros expuso diversas formas de acceder a dichas prendas de vestir en el mercado formal e informal.

DÉCIMO CUARTO: Desestimación de la circunstancia agravante concomitante. En cuanto a la concurrencia de la agravante concomitante del artículo 449 bis de nuestro Código Penal, invocada por los acusadores respecto de todos los imputados, estos adjudicadores, por unanimidad, la desestimarán, atendido que, tal como fue alegado particularmente por la Defensoría Penal Pública, su reconocimiento en la especie, vulneraría la norma contenida en el artículo 63 del mismo cuerpo legal, al realizarse una doble ponderación de la misma circunstancia, que conllevaría a una exasperación de la pena, en una forma no permitida, vulnerando particularmente los principios de necesidad y proporcionalidad de la misma.

Ha de tenerse en consideración que el fundamento político-criminal de la prohibición de doble valoración es justamente la prohibición de exceso o afectación al principio de proporcionalidad. Es decir, la prohibición de exceso, en lo que nos ocupa, exige al juzgador excluir la aplicación de aquellas agravantes inherentes al delito, porque la pena aplicable sería excesiva. En materia de las agravantes, el principio de inherencia contemplado en el artículo 63 del Código Penal excluye la aplicación de agravantes en tres casos: 1) cuando la agravante constituye por sí misma un delito especialmente penado por la ley; 2) cuando la ley ha expresado una circunstancia agravante al describir y penar un delito, y 3) cuando la circunstancia agravante es de tal manera inherente al delito que sin su concurrencia éste no se puede cometer; siendo relevante señalar que este último caso se subdivide a su vez en dos: primero, cuando la inherencia de la agravante al delito se encuentra implícita en el tipo penal y, en segundo término, como el caso que nos ocupa, *cuando la inherencia de la agravante al delito deriva de las circunstancias concretas en las que se comete*. Es justamente este último caso, el que ocurre en la especie, toda vez que la atribución de coautoría que estos adjudicadores realizaron respecto a todos los partícipes de los 4 primeros delitos materia de la acusación, se erigió sobre la base de una participación concertada en un hecho colectivo, dentro del cual, a cada interviniente le cupo un rol determinado, cuyo desenlace final *era imposible de obtener sin la pluralidad de sujetos que recoge el referido artículo 449 bis* de nuestro código punitivo.

Menester es señalar, que la inconcurrencia de esta agravante no se produce por la falta de acreditación de algunos de los elementos o presupuestos necesarios para que se haya tenido por establecida, toda vez que el acervo probatorio, sobre todo respecto del modus operandi de la banda, dio debida cuenta de la pluralidad de sujetos, su reiteración (aun cuando aquella no se diese en términos exactos, atendida la fungibilidad que pudo apreciarse en los miembros de esta agrupación) permite colegir una cierta permanencia en el tiempo, cierto grado

de organización y no existe duda que la prueba incorporada permitió colegir que aquella estaba destinada a cometer determinados hechos punibles; sino que, el rechazo de la misma obedeció a la ya referida proscripción de una doble valoración de una misma circunstancia y la consecuencial vulneración al principio ne bis in ídem.

DÉCIMO QUINTO: En virtud de los asertos que preceden el tribunal, resuelve que:

a) Se ABSUELVE al acusado, **Alejandro Humberto Huerta Salinas**, como autor de un delito de **tenencia ilegal de municiones, previsto en el artículo 9 inciso segundo con relación al**

artículo 2 de la ley sobre control de armas, supuestamente cometido en la comuna de Maipú de esta ciudad, el día 15 de diciembre de 2020.

b) Se ABSUELVE al acusado, **Jonathan Elizardo Díaz Gaete**, como autor de los delitos de **posesión o tenencia de arma prohibida; y de posesión o tenencia ilegal de arma de fuego**, supuestamente cometidos en las comunas de Conchalí, el día 17 de mayo de 2021 y en la comuna de Lo Espejo, el día 15 de septiembre de 2021.

c) Se ABSUELVE al acusado, **Jonathan Elizardo Díaz Gaete**, como autor del delito de **dos delitos reiterados de posesión o tenencia ilegal de municiones**, supuestamente cometidos en las comunas de Conchalí, el día 17 de mayo de 2021 y en la comuna de Lo Espejo, el día 15 de septiembre de 2021.

d) Se ABSUELVE al acusado, **Jonathan Elizardo Díaz Gaete**, como autor del delito de **receptación, previsto y sancionado en el artículo 456 bis A, del Código Penal**, supuestamente cometido en la comuna Lo Espejo de esta ciudad, el día 15 de septiembre de 2021.

e) Se ABSUELVE al acusado, **Marco Antonio Morales Astete**, como autor del delito de **un delito de posesión o tenencia ilegal de municiones**, supuestamente cometido en la comuna de La Cisterna de esta ciudad, el día 15 de septiembre de 2021 .

f) Se CONDENA a **Alejandro Humberto Huerta Salinas**, como autor de **un delito de robo con violencia e intimidación** contemplado en el artículo 436, en relación a los artículos 432 y 439 del Código Penal, cometido en la comuna de Maipú de esta ciudad, el día 15 de diciembre de 2020.

g) Se CONDENA a **Alejandro Humberto Huerta Salinas**, como autor de un delito de **homicidio frustrado de funcionario de Carabineros de Servicio, según lo previene el artículo 416 del Código de Justicia Militar, en grado de ejecución frustrado**, cometido en la comuna de Maipú de esta ciudad, el día 15 de diciembre de 2020.

h) Se CONDENA a **Alejandro Humberto Huerta Salinas**, como autor de un delito de **porte de arma prohibida prevista en el artículo 14 en relación con el artículo 3 de la ley de control de armas**, cometido en la comuna de Maipú de esta ciudad, el día 15 de diciembre de 2020.

i) Se CONDENA a **Marco Antonio Morales Astete**, como autor de **tres delitos de robo con violencia e intimidación** contemplado en el artículo 436, en relación a los artículos 432 y 439 del Código Penal, cometidos en las comunas de Cerrillos y Maipú de esta ciudad, los días 15 de diciembre de 2020, y 12 y 16 de febrero, ambos del año 2021.

j) Se CONDENA a **Marco Antonio Morales Astete**, como autor de un delito de **robo con homicidio, establecido en el artículo 433 N°1 del Código Penal**, cometido en la comuna de Maipú de esta ciudad, el día 8 de marzo de 2021.

k) Se CONDENA a **Marco Antonio Morales Astete**, como autor de un delito de **Posesión o Tenencia ilegal de arma de fuego, artículo 9 inciso primero -artículo 2 de la Ley de control de armas**, cometido en la comuna de La Cisterna de esta ciudad, el día 15 de septiembre de 2021.

l) Se CONDENA a **Jonathan Elizardo Díaz Gaete**, como autor de **tres delitos de robo con violencia e intimidación** contemplado en el artículo 436, en relación a los artículos 432 y 439 del Código Penal, cometidos en las comunas de Cerrillos y Maipú de esta ciudad, los días 15 de diciembre de 2020, y 12 y 16 de febrero, ambos del año 2021.

ll) Se CONDENA a **Jonathan Elizardo Díaz Gaete**, como autor de un delito de **robo con homicidio, establecido en el artículo 433 N°1 del Código Penal**, cometido en la comuna de Maipú de esta ciudad, el día 8 de marzo de 2021.

m) Se CONDENA a **Jenniffer Dorett Morales Astete y a Paola Elizabeth Salinas Quevedo**, como autoras de **tres delitos de robo con violencia e intimidación** contemplado en el

artículo 436, en relación a los artículos 432 y 439 del Código Penal, cometidos en las comunas de Cerrillos y Maipú de esta ciudad, los días 15 de diciembre de 2020, y 12 y 16 de febrero, ambos del año 2021.

n) Se CONDENA a **Jenniffer Dorett Morales Astete y a Paola Elizabeth Salinas Quevedo**, como autoras de un delito de **robo con homicidio, establecido en el artículo 433 N°1 del Código Penal**, cometido en la comuna de Maipú de esta ciudad, el día 8 de marzo de 2021.

o) Se CONDENA a **Guillermo Antonio Cuevas Aravena**, como autor de **dos delitos de robo con violencia e intimidación** contemplado en el artículo 436, en relación a los artículos 432 y 439 del Código Penal, cometido en las comunas de Maipú y Puente Alto de esta ciudad, los días 15 de diciembre de 2020 y 12 de febrero del año 2021.

p) Se CONDENA a **Guillermo Antonio Cuevas Aravena**, como autor de un delito de **robo con homicidio, establecido en el artículo 433 N°1 del Código Penal**, cometido en la comuna de Maipú de esta ciudad, el día 8 de marzo de 2021.

q) Se CONDENA a **Carlos Patricio Silva Olivares**, como autor de **dos delitos de robo con violencia e intimidación** contemplado en el artículo 436, en relación a los artículos 432 y 439 del Código Penal, cometido en las comunas de Puente Alto y Maipú de esta ciudad, los días 12 y 16 de febrero del año 2021, respectivamente.

r) Se CONDENA a **Carlos Patricio Silva Olivares**, como autor de un delito de **robo con homicidio, establecido en el artículo 433 N°1 del Código Penal**, cometido en la comuna de Maipú de esta ciudad, el día 8 de marzo de 2021.

s) Se CONDENA a **Jeremy Alexander Carrasco Aránguiz**, como autor de **un delito de robo con violencia e intimidación** contemplado en el artículo 436, en relación a los artículos 432 y 439 del Código Penal, cometido en la comuna de Puente Alto de esta ciudad, el día 12 de febrero del año 2021.

t) Se CONDENA al acusado, **Jeremy Alexander Carrasco Aránguiz**, como autor de un delito de **robo con homicidio, establecido en el artículo 433 N°1 del Código Penal**, cometido en la comuna de Maipú de esta ciudad, el día 8 de marzo de 2021.

u) Se CONDENA a **Víctor Hugo Morales Astete**, como autor de **un delito de robo con violencia e intimidación** contemplado en el artículo 436, en relación a los artículos 432 y 439 del Código Penal, cometido en la comuna de Maipú de esta ciudad, el día 15 de diciembre de 2020.

- La **audiencia de comunicación de sentencia** se efectuará el día 28 de mayo de 2025 a las 13:30 horas, quedando todos los intervinientes válidamente notificados.
- La sentencia será redactada por el juez **PABLO URRUTIA SULANTAY**.
- **No se solicitan los traslados de los acusados.**
- Certifíquese los abonos por quien corresponda.